



MISIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

**MPRD-ONU-NY-1529-2019**

The Permanent Mission of the Dominican Republic to the United Nations presents its compliments to the Permanent Mission of Argentina to the United Nations, and has the honor to respond to its Note No. **ENAUN 678/2019**, dated August 09, 2019.

Find enclosed to this verbal note the substantive inputs of the Dominican Republic requested by the Open-ended Working Group of Ageing, focusing in different areas; the right of work, the access to the labor market and Access to the justice.

The Permanent Mission of the Dominican Republic to the United Nations avails itself of this opportunity to renew to the Permanent Mission of Argentina Republic to the United Nations the assurances of its highest consideration

New York, 31 October, 2019

To the Permanent Mission of Argentina  
to the United Nations  
New York, NY



**Marco normativo de las cuestiones examinadas en la IX sesión del Grupo de Trabajo de  
Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre Envejecimiento**

**I. Educación, entrenamiento, aprendizaje en el ciclo de vida y construcción de capacidades**

**Definición:** La persona adulta mayor tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, sin discriminación, en igualdad de condiciones y oportunidades, durante todo el proceso de envejecimiento y final de su vida, de igual manera tiene derecho al desarrollo de sus capacidades y potencialidades<sup>1</sup>.

**Alcance del derecho:**

- Garantía del derecho al acceso sin ningún tipo de discriminación ni limitación en todos los niveles y modalidades<sup>2</sup>.
- Diseño e implementación de políticas de educación continuada.
- Creación de programas educativos que faciliten el aprendizaje al adulto mayor.

**Obligación de los estados:**

- No limitación para el acceso a la educación a las personas adultas mayores<sup>3</sup>.
- Creación de programas educativos que permitan realizar estudios básicos en horarios simplificados.
- Habilitación de instituciones de educación superior donde se implemente un sistema educativo andragógico.
- Desarrollo de programas de alfabetización personas adultas mayores.

**Consideraciones especiales:**

- Tomar en cuenta la situación de salud o condiciones de discapacidad de una persona adulta mayor (por ej. la visual, que lo textos estén el método braille).
- La creación de un curriculum especializado para las personas mayores.

**Responsabilidades de partes no estatales:**

- Ser veedores y entes activos para garantizar el acceso universal a la educación de las personas mayores en todos los niveles.

**Mejores prácticas y principal desafío:**

- La habilitación por parte del Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología (MESYT) de Universidades con sistema educativo andragógico para la enseñanza de personas adultas.
- La inclusión en la Estrategia Quisqueya Sin Miseria del Programa Quisqueya Aprende Contigo, que consiste en la alfabetización de personas jóvenes y adultas.
- La implementación a través del CONAPE del programa “Alfabetizando al adulto mayor calle por calle” que consiste en la alfabetización de personas adultas mayores en su propio hogar a través de núcleos de alfabetización y en los centros de atención integral al adulto mayor.

<sup>1</sup> Constitución República Dominicana, Art. 63.

<sup>2</sup> Ley 352-98 sobre protección de la persona envejeciente, Art. 15

<sup>3</sup> Artículos 1 y 35 de Ley Orgánica de Educación no. 66-97 de República Dominicana



## **2. Protección social y seguridad social (incluidos los pisos de protección social)**

**Definición:** El derecho a la protección que una sociedad o país debe proporcionar a los individuos y ciudadanos adultos mayores para asegurar el acceso universal a la asistencia médica, discapacidad, desocupación, accidentes del trabajo y vejez.

### **Alcance de los Derechos:**

- Ingresos para una vida digna
  - Pensiones
  - Prestaciones para los casos de discapacidad y sobrevivencia
  - Acceso universal a la salud sin discriminación o exclusión.
  - Alimentación
  - Cuidados
- a) **Disponibilidad de esquemas contributivos y no contributivos para personas mayores.** En el caso de las personas adultas mayores, las normativas existentes en materia de seguridad social son limitativas, pues los sistemas vigentes: contributivo y no contributivo se condicionan, en el primer caso (contributivo) a que el ciudadano esté activo cotizando en el sistema para recibir los beneficios de la seguridad social. Mientras que en el no contributivo (que es el denominado subsidiado), solo reciben el servicio de salud, y pensión solidaria, por sobrevivencia, o discapacidad.
- b) **Adecuación de los beneficios para garantizar el acceso de las personas mayores a un nivel de vida y acceso a la atención médica adecuados.** La implementación de los niveles de atención en el sistema de seguridad social dominicano, lo que permitirá la aplicación de la medicina preventiva en adultos mayores, garantizando el acceso universal de los adultos mayores a la salud, lo cual proporciona niveles de calidad de vida adecuados.
- c) **Accesibilidad, incluida la cobertura de personas mayores según los criterios de elegibilidad de los sistemas de seguridad social y la asequibilidad de las contribuciones.** Actualmente, la seguridad social es universal para todos los ciudadanos, cotizantes o no en el sistema, no obstante, la asequibilidad depende al régimen al que esté afiliado el ciudadano (contributivo o no contributivo).
- d) **Acceso equitativo de las personas mayores al disfrute del derecho a la seguridad social y la protección social, prestando especial atención al grupo en situación vulnerable.** Las personas adultas mayores tienen acceso en igualdad de condiciones a la seguridad social y protección social, a través de distintas políticas públicas como, el programa SENASA CUIDA DE TI, que se han implementado conjuntamente con el órgano rector (CONAPE) y distintos ministerios e instituciones para garantizar el acceso. Mediante el cual se le presta atención especializada a este segmento poblacional, incluido en sus hogares.
- e) **Participación de personas mayores en el diseño y gestión del sistema de seguridad social.** Se crean espacios consultivos, mesa de trabajo y otros mecanismos para la inclusión de las personas mayores, a través de las Ongs que agrupan este segmento de la población.

### **Obligación de los Estados:**

- Fortalecer las instituciones rectoras en materia de políticas públicas de adultos mayores, otorgándole facultad de imponer sanciones, recomendar y tomar medidas cuando es violado el derecho a la seguridad social de las personas adultas mayores.
- Diseñar políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio y goce de los derechos a la seguridad social para las personas adultas mayores.

### **Consideraciones especiales:**



- Asegurar el acceso de personas mayores a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza<sup>4</sup>;
- Asegurar la realización de sinergias intersectoriales para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social de las personas adultas mayores.
- Crear mecanismos de ejecución de las decisiones judiciales en materia de seguridad social.

Responsabilidades de partes no estatales:

- Velar por el cumplimiento por parte de los órganos del estado de las disposiciones en materia constitucional y normativa que aseguran el acceso universal al derecho a la seguridad social de las personas adultas mayores.

**Implementación:**

Mejores Prácticas

- La implementación de políticas públicas para la inclusión de las personas adultas mayores en el régimen subsidiado, mediante el cual tienen protección de salud, pensiones solidarias por vejez, discapacidad y sobrevivencia y de programas especiales para este segmento poblacional.

Desafíos:

- Implementar lo establecido en la Ley 87-01 sobre Seguridad Social referente a la atención primaria de salud, como puerta de entrada a las atenciones de salud<sup>5</sup>.
- Fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios especializados de salud y de cuidados a personas adultas mayores, así como las pensiones debido a la gran demanda que se tendrá por el aumento de la población envejecida.



<sup>4</sup> Convención de los Derechos de Discapacidad

<sup>5</sup> Ley 87-01 sobre Seguridad Social, Art. 152

**Regulatory framework for issues examined at the IX session of the United Nations Open-ended Working Group on Aging**

**1. Education, training, Life-long learning and Capacity building**

**Definition:** The elderly has the right to an integral, quality, permanent, non-discriminatory education, in equal conditions and opportunities, throughout the aging process and the end of his life, in the same way he has the right to develop his abilities and potential [1].

**Scope of the right:**

- Guarantee of the right to access without any discrimination or limitation at all levels and modalities[2].
- Design and implementation of continuing education policies.
- Creation of educational programs that facilitate learning for the elderly.

**Obligation of the states:**

- No limitation for access to education for the elderly[3].
- Creation of educational programs allowing perform basic studies in simplified schedules.
- Habilitation of institutions of higher education where an andragogic educational system is implemented.
- Development of literacy programs for the elderly.

**Special considerations:**

- Take into account the health situation or disability conditions of an older person (eg the visual, text with large words, availability of texts in Braille method).
- The creation of a specialized curriculum for the elderly.

**Responsibilities of non-state parties:**

- To be active seers and entities to guarantee universal access to education for the elderly at all levels.

**Best practices and main challenge:**

- The authorization by the Ministry of Higher Education of Science and Technology (MESCyT) of Universities with andragogic educational system for the teaching of older persons.
- Inclusion in the program “Quisqueya sin Miseria” as part of the Program Quisqueya Aprende Contigo”, consisting of literacy for youth and adults.
- The implementation through CONAPE of the “Literacy for the elderly street by street” program, which consists of the literacy of older adults in their own homes through literacy centers and in the centers for comprehensive care for the elderly.

**2. Social protection and social security (including social protection floors)**

**Definition:** The right to protection that a society or country must provide to individuals and senior citizens to ensure universal access to medical care, disability, unemployment, accidents at work and old age.

**Scope of Rights:**

- Income for a decent life
- Pensions
- Benefits for disability and survival cases
- Universal access to health without discrimination or exclusion.
- Feeding



- Care

- a) Availability of contributory and non-contributory schemes for older persons.** In the case of the elderly, the existing social security regulations are limiting, since the current systems: contributory and non-contributory are conditioned, in the first case (contributory) to the citizen being active quoting in the system for Receive social security benefits. While in the non-contributory (which is called subsidized), they only receive the health service, and solidarity pension, for survival, or disability.
- b) Adaptation of the benefits to guarantee the access of the elderly to a standard of living and access to adequate medical care.** The implementation of standards of care in the Dominican social security system, allowing the application of preventive medicine in the elderly, guarantees universal access of older persons to health, providing adequate levels of quality of life.
- c) Accessibility, including coverage of the older persons according to the eligibility criteria of social security systems and the affordability of contributions.** Currently, social security is universal for all citizens, contributors or not in the system, however, affordability depends on the regime to which the citizen is affiliated (contributory or non-contributory).
- d) Equitable access of older persons to the enjoyment of the right to social security and social protection, paying special attention to the vulnerable group.** Older persons have equal access to social security and social protection, through different public policies such as the SENASA CUIDA DE TI program, which have been implemented jointly with the governing body (CONAPE) and various ministries and institutions to guarantee access. Through which gives specialized attention to this population segment, included in their homes.
- e) Participation of older people in the design and management of the social security system.** Consultative spaces, work tables and other mechanisms for the inclusion of the elderly are created, through the NGOs that group this segment of the population.

#### **Obligation of the States:**

- Strengthen the governing institutions in the field of public policies for the elderly, granting them the power to impose sanctions, recommend and take measures when the right to social security of older persons is violated.
- Design public policies that guarantee the full exercise and enjoyment of social security rights for the elderly.

#### **Special considerations:**

- Ensure access for the elderly to social protection programs and poverty reduction strategies[4] ;
- Ensure the realization of intersectoral synergies to guarantee the full exercise of the right to social security of the elderly.
- Create mechanisms for executing judicial decisions regarding social security.

#### **Responsibilities of non-state parties:**

- Ensure compliance by state bodies of the provisions in constitutional matters and regulations that ensure universal access to the right to social security for older persons.



## **Implementation:**

### Best practices

- The implementation of public policies for the inclusion of the elderly in the subsidized regime, through which they have health protection, solidarity pensions for old age, disability and survival and special programs for this population segment.

### Challenges:

- Implement the provisions of Law 87-01 on Social Security regarding primary health care , as a gateway to health care[5]
- Strengthen the capacity of response of specialized health and care services for elderly, as well as pensions due to the great demand that will be the increase in the elderly population.

---

[1] Constitution Dominican Republic, Art. 63 .

[2] Law 352-98 on protection of the elderly, Art. 15

[3] Articles 1 and 35 of Organic Law of Education no. 66-97 of Dominican Republic

[4] Disability Rights Convention

[5] Law 87-01 on Social Security, Art. 152



**Insumos para la XI Sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones  
Unidas sobre Envejecimiento**

**Área de enfoque: Derecho al Trabajo y Acceso al Mercado Laboral**

**Marco nacional de políticas legales**

La Constitución dominicana en su artículo 62 reconoce el derecho al trabajo de todos los ciudadanos/as como sigue, “El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado”, así como el código de trabajo en su principio II.

Ley 352-98 sobre Protección a la Persona Envejeciente reconoce el derecho de “todo(a) envejeciente al trabajo, en igualdad de oportunidades y a todas las garantías que al respecto otorgan las leyes laborales, sin discriminación alguna. El Ministerio de Trabajo y las organizaciones de empleadores y trabajadores deberán tomar las medidas necesarias para que las labores del(a) envejeciente se desarrollen en condiciones satisfactorias y seguras. Deberán tomarse las medidas necesarias para que el(a) envejeciente encuentre o reencuentre ubicación laboral mediante nuevas posibilidades de empleo”.

Entre los desafíos que enfrentan las personas mayores para la realización de su derecho al trabajo y el acceso al mercado laboral se pueden destacar ciertas prácticas discriminatorias en materia de acceso al mercado laboral que desde algunos sectores se realizan en detrimento de esta población, la garantía de un nivel mínimo de recursos adecuados a personas mayores jubiladas o pensionadas para su subsistencia y la de su familia, dificultades para tener acceso a un empleo o trabajo independiente, así como la desigualdad de trato en la vida laboral.

En relación a los datos estadísticos e investigaciones disponibles sobre las personas mayores que realizan trabajos informales, la República Dominicana cuenta con dos documentos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), a saber:

- a) *Medición del aporte de la mujer en las actividades agropecuarias de la República Dominicana*, en el cual destaca que la proporción mayor de productores se encuentra en los adultos mayores; es decir, las personas de más de 60 años (51 %).
- b) *El trabajo no remunerado en República Dominicana. Análisis a partir de los datos del módulo de uso del tiempo de la ENHOGAR 2016*, que destaca entre sus principales conclusiones que, en República Dominicana una mujer dedica 3.25 veces más tiempo que un hombre al trabajo no remunerado. Este valor está ligeramente por encima del promedio regional de 3.15, que el ciclo de vida y la edad reproductiva es un factor determinante para el incremento del trabajo doméstico y de cuidado. Las mujeres de 25 a 45 años presentan la mayor cantidad de horas dedicadas a este tipo de trabajo y a tendencia de la participación femenina en el mercado de trabajo va en aumento; sin embargo, las mujeres siguen subyugadas por la división tradicional del trabajo. Los datos expresan que las mujeres emplean más horas en trabajo total que los hombres.

**Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad**

En cuanto a la garantía del acceso de las personas mayores al mercado laboral, la República Dominicana a través del Ministerio de Trabajo creó la Dirección de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, para garantizar el acceso de las personas adultas mayores al mercado laboral, así como brindar asesoría y asistencia a esta población.

Así mismo se han creado proyectos y programas para garantizar la continuidad productiva de adultos mayores pensionados y jubilados y también para aquellos que tengan capacidad de continuar ofreciendo sus conocimientos y habilidades en el mercado laboral.





**Insumos para la XI Sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre Envejecimiento**

Entre las buenas prácticas disponibles para garantizar que las personas mayores disfruten de su derecho al trabajo y su acceso al mercado laboral podemos destacar el Programa Pasantes con sabiduría del CONAPE, el cual promueve el emprendimiento y la vida productiva en el adulto mayor, a través de pasantías en instituciones públicas, privadas, educativa y sociales, con la finalidad del traspaso de conocimiento y sabiduría de los adultos mayores para ser transmitidas a otras generaciones, a fin de generar ingresos y un empleo estable en esta población; Incentivo a la permanencia productiva a través de los premios Ejemplos de Vida de CONAPE, mediante el cual se reconoce a aquellos adultos mayores que se encuentran activos laboralmente así como también a las instituciones y empresas que mantienen a estos en sus puestos de trabajo.

En relación a las protecciones disponibles para el disfrute de este derecho, en el sector privado, los adultos mayores pueden solicitar protección ante el Ministerio de Trabajo, y el en el sector público ante el Ministerio de Administración Pública (MAP), donde pueden solicitar protección e intermediación en caso de que no tengan condiciones justas y favorables, así como un salario equitativo en función de la labor que realizan. En cuanto a condiciones de trabajo seguras, a través del CONAPE pueden interponer denuncias de trabajo forzoso que son procesadas en la Fiscalía Especializada contra abuso y maltrato al adulto mayor.

**Igualdad y no discriminación**

El Código de Trabajo de la República Dominicana reconoce la prohibición de cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa.

**Compensaciones y reparaciones**

Entre los mecanismos existentes para que las personas mayores presenten quejas y soliciten reparación por la negación de su derecho al trabajo y al acceso al mercado laboral tenemos disponible los siguientes: 1-Para el reporte o denuncia ante las autoridades estatales: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Administración Pública y CONAPE; 2-Para la reclamación de una acción en relación a la negación del derecho: los tribunales laborales, el Tribunal Constitucional y los tribunales civiles.

**Área de enfoque: acceso a la justicia**

**Marco legal nacional**

La Constitución de la República Dominicana garantiza el acceso a la justicia a través del derecho a la igualdad consagrado en su artículo 39 que versa “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.

Entre los Mecanismos judiciales disponibles tenemos: recursos contenciosos administrativos, recurso constitucional y recurso de amparo. Así también la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría de la República Dominicana, ejerce la función de Fiscalía Especializada contra abuso y maltrato hacia el adulto mayor. A través de estos mecanismos los adultos mayos tienen acceso a la justicia y la justa reparación de situaciones que se ejercen en su contra por algún particular o familiar e inclusive institución pública o privada.

Entre los mecanismos no judiciales tenemos disponibles: los centros de mediación familiar, las Casas Comunitarias de Justicia y la asistencia a través del Departamento Denuncias Seguimiento de Casos de CONAPE.



**Insumos para la XI Sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones  
Unidas sobre Envejecimiento**

**Disponibilidad**

A través de la implementación del programa SECARE-Servicios, Capacitación y Recreación en los centros de atención al adulto mayor disponibles a nivel nacional, se garantiza la disponibilidad de mecanismos judiciales y no judiciales en las que destacan la implementación de los Centros de Mediación Comunitarios, las Casas Comunitarias De Justicia, que funge como centros de mediación en el proceso de conflictos o controversias.

**Accesibilidad**

Se ha realizado jornadas de humanización y sensibilización en los servicios hacia la población adulta mayor para garantizar que todos los sistemas de justicia sean seguros, asequibles y físicamente accesibles para las personas mayores y se adapten a sus necesidades. La Constitución dominicana y la ley 352-98 contienen disposiciones para garantizar la asistencia jurídica a las personas mayores.

Entre los desafíos específicos que enfrentan las personas mayores para acceder a la justicia y reparación, podemos destacar: el costo de los procesos judiciales en materia civil y el tiempo que conlleva iniciar y concluir un proceso legal; la falta de conocimiento de la población sobre la unidad especializada en violencia contra el adulto mayor; dilaciones, diversificación de oficinas y retrasos judiciales que quebrantan la resistencia de las personas adultas mayores que acuden al sistema de administración de justicia.

En cuanto a las buenas prácticas disponibles para garantizar el acceso equitativo y efectivo a la justicia y reparación para las personas mayores tenemos la asistencia gratuita de abogados para los adultos mayores que no cuenten con los recursos económicos necesarios para la defensa de sus derechos ante la justicia, las consultorías y asesorías a esta población, y las vistas Públicas de la unidad especializada en violencia contra el adulto mayor. En lo que respecta a la igualdad y no discriminación, se protege a través del artículo 39 de la Constitución dominicana sobre el derecho a la igualdad enunciado anteriormente.

Entre las políticas públicas y los programas de sensibilización para abordar los impactos negativos por la discriminación por edad en el sistema de justicia podemos destacar, la sensibilización y humanización en la asistencia hacia la población adulta mayor, los acuerdos interinstitucionales con instituciones del órgano judicial estatal y las charlas sobre los derechos de los adultos mayores.

En relación al aspecto de responsabilidad, para asegurar que los sistemas de justicia funcionen de acuerdo con los principios de independencia e imparcialidad, se realizan investigaciones de las denuncias perpetradas por ciudadanos que han realizado reclamaciones o recursos de inconstitucionalidad a decisiones judiciales, a fin de procesarlas y sancionarlas. También existe el Consejo del Poder Judicial, ante el cual pueden ser sometidas denuncias y acciones en contra de funcionarios judiciales que han realizado actos discriminatorios contra las personas adultas mayores.

Entre los mecanismos de supervisión para abordar cualquier discriminación contra las personas mayores cometidas por profesionales del sistema de justicia, tenemos la unidad relámpago del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, la cual tiene como objetivo fiscalizar el cumplimiento de la ley 352-98 en instituciones públicas y privadas para identificar posibles violaciones a los derechos de las personas mayores así como también sensibilizar a la población; está conformada por un equipo de Defensores que responden a las denuncias en esta temática.



## Inputs for the XI Session of the United Nations Open-ended Working Group on Aging

### Focus Area: Right to work and Access to the Labour Market

#### **National Legal and Policy Framework**

The Dominican Constitution in its article 62 recognizes the right to work of all citizens as follows, “Work is a right, a duty and a social function that is exercised with the protection and assistance of the State. It is an essential purpose of the State to promote decent and paid employment. The public authorities shall promote dialogue and consultation between workers, employers and the State”, as well as the Labour Code in its principle II.

Law 352-98 on Protection of the Older Person recognizes the right of “older persons to work, in equal opportunities and to all the guarantees granted in this regard by labor laws, without any discrimination. The Ministry of Labor and employers 'and workers' organizations must take the necessary measures so that the work of the elderly is carried out in satisfactory and safe conditions. The necessary measures must be taken so that the elderly find or find a work location through new employment opportunities”.

Among the challenges faced by the elderly for the realization of their right to work and access to the labor market, certain discriminatory practices in terms of access to the labor market carried out to the detriment of this population can be highlighted; the guarantee of a minimum level of adequate resources for retired or pensioned older persons for their subsistence and their family, difficulties in accessing independent employment or work, as well as unequal treatment in working life.

Regarding the statistical data and research available on older persons in informal work, the Dominican Republic has two documents of the National Bureau of Statistics (ONE), namely:

- a) *Measurement of the contribution of women in the agricultural activities of the Dominican Republic*, in which it is emphasized that the largest proportion of producers is in the elderly; that is, people over 60 years old (51%).
- b) *Unpaid work in the Dominican Republic. Analysis from the data of the module of use of the time of the “ENHOGAR” 2016*, which stands out among its principals with conclusions that, in the Dominican Republic, a woman devotes 3.25 times more time than a man to unpaid work. This value is slightly above the regional average of 3.15, that the life cycle and reproductive age is a determining factor for the increase in domestic and care work. The women from 25 to 45 years have the highest number of hours devoted to this type of work and trend of female participation in the market for labor is increasing; however, women remain subjugated by the traditional division of labor. The data express that women spend more hours in total work than men.

#### **Availability, accessibility, acceptability and quality**

Regarding to the guarantee of the access of the elderly to the labor market, the Dominican Republic, through the Ministry of Labor, created the Directorate for Equal Opportunities and Non-Discrimination, to guarantee the access of the elderly to the labor market, as well as provide advice and assistance to this population.

Also, they have created projects and programs to ensure continued production of elderly pensioners and retirees and for those with capacity to continue offering their knowledge and skills in the labor market. Among the good practices available to ensure that older people enjoy their right to work and access to the labor market, we can highlight the Internship Program from CONAPE, which promotes entrepreneurship



and productive life in the elderly, through internships in public, private, educational and social institutions, to transfer of knowledge and expertise of the older persons to other generations, in a way to generate income and a stable employment in this population; Incentive for productive permanence through the CONAPE “Ejemplos de Vida” awards , which recognizes those older adults who are active in work as well as the institutions and companies that keep them in their jobs.

In relation to the protections available for the enjoyment of this right, in the private sector, older adults can apply for protection before the Ministry of Labor, and in the public sector before the Ministry of Public Administration (MAP), where they can request protection and intermediation in case they do not have fair and favorable conditions of work, as well as an equitable salary depending on the work they do. As for safe working conditions, through CONAPE they can interpose complaints of forced labor that are processed in the Special Prosecutor against abuse and Mistreatment of the elderly.

### **Equality and non-discrimination**

The Labor Code of the Dominican Republic recognize the prohibition of any discrimination, exclusion or preference based on sex, age, race, color, national extraction, social origin, political opinion, trade union activism or religious belief .

### **Remedies and Redress**

Among the existing mechanisms for older persons to submit complaints and request reparation for the denial of their right to work and access to the labor market, we have available the following : 1- For the report or complaint before the governmental authorities : Ministry of Labor, Ministry of Public Administration and CONAPE; 2- For the claim of an action in relation to the denial of the right: the labor courts , the Constitutional Court and the civil courts .

### **Focus Area: Access to Justice**

#### **National legal framework**

The Constitution of the Dominican Republic guarantees access to justice through its right to equality enshrined in Article 39 which deals with "All people are born free and equal before the law, receive the same protection and treatment institutions, authorities and other people and enjoy the same rights, freedoms and opportunities, without any discrimination based on gender, color, age, disability, nationality, family ties, language, religion, political or philosophical opinion, social or personal status".

Among the available judicial mechanisms, we have: administrative contentious appeals, constitutional appeal and writ of protection. Likewise, the Human Rights Unit of the Office of the Attorney General of the Dominican Republic, acts as a Special Prosecutor against abuse and mistreatment of the elderly. Through these mechanisms older persons have access to justice and fair compensation for situations against him for any individual or family and even public or private institutions.

Among the judicial mechanisms we have available: family mediation centers, Community Justice Houses and assistance through the Department of Complaints and Case Monitoring of CONAPE.

#### **Availability**

Through the implementation of “SECARE” program- Services, Training and Recreation, at senior integral care centers available nationwide, we ensure the availability of judicial and non - judicial mechanism in



which outstand the implementation of the Mediation Community Centers, the Community Justice Houses, which serves as mediation centers in the process of conflicts or controversies.

### **Accessibility**

Humanization and awareness-raising sessions have been held in the services of the elderly to ensure that all justice systems are safe, affordable and physically accessible for this population and adapted to their needs. The Dominican Constitution and Law 352-98 contain provisions to guarantee legal assistance to the elderly.

Among the specific challenges that older people faced to access to justice and repair, we can highlight: the cost of court proceedings in civil matters and the time involved initiate and conclude a legal process; the high knowledge of the population about the specialized unit in violence against the elderly; dillations, diversification of offices and judicial delays that break the resistance of the elderly who come to the system of administration of justice.

Regarding the good practices available to guarantee equitable and effective access to justice and reparation for the elderly, we have the free assistance of lawyers for the elderly who do not have the necessary financial resources to defend their rights before justice, consulting and advisory services to this population, and the Public hearings of the unit specialized in violence against the elderly. With regard to equality and non-discrimination, it is protected through article 39 of the Dominican Constitution on the right to equality set forth above.

Between public policies and awareness programs to address the negative impacts discrimination on age in the justice system highlight, the awareness and humanization in assistance to the elderly population, inter-institutional agreements with institutions of the state judicial body and talks on the rights of older adults.

In relation to the aspect of responsibility, to ensure that justice systems work in accordance with the principles of independence and impartiality, investigations of complaints made by citizens who have made claims or remedies of unconstitutionality to judicial decisions are carried out, in order to process them and punish them. There is also the Council of the Judiciary, to which complaints and actions may be filed against judicial officials who have performed discriminatory acts against the elderly.

Among the mechanism s oversight to address any discrimination against older persons committed by professionals of the justice system, we have the flash unit of the National Council for the Elderly, which aims to monitor compliance with the law 352-98 in public institutions and private s to identify possible violations of the rights of the elderly as well as raise public awareness; It is made up of a team of Defenders that respond to complaints on this issue.

